

**Acuerdo de 21 de enero de 2021, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación de “Servicio de transporte en taxi, urbano e interurbano, en la Comunidad de Madrid”, número de expediente 6012000378.**

Con fecha 13 de enero de 2021 se ha recibido en este Tribunal escrito de interposición de reclamación en materia de contratación de la representación de la asociación de ámbito nacional UNAUTO VTC, contra el anuncio y los pliegos de la licitación de referencia cuya convocatoria fue publicada en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid el 18 de diciembre de 2020.

La recurrente en el escrito de reclamación solicita que se acuerde la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación hasta la resolución del presente recurso, fundamentándolo en que no puede proseguir el procedimiento cuando se está limitando la concurrencia y “se vulneran los artículos 27 del RDLCSE y 1 de la LCSP”.

El artículo 121 del Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales ( en adelante RDLCSE) establece que serán de aplicación a las reclamaciones que se interpongan ante los Tribunales Administrativos de Contratación Pública las disposiciones de la LCSP que regulan el recurso especial en materia de contratación.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **088942523102590662475**

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.

Remitida, el 15 de enero de 2020, al órgano de contratación solicitud de envío a este Tribunal del expediente y del preceptivo informe establecido en el artículo 56.2 de la LCSP, sin que hasta la fecha se haya remitido, compete a este Tribunal decidir sobre la medida cautelar sin contar con el pronunciamiento del órgano de contratación.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que



obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado, el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente caso, la actuación que se impugna son los pliegos por un aparente incumplimiento del RDLCSE y de la LCSP.

Dado que el plazo de presentación de ofertas finalizó el 19 de enero de 2021 y que sería posible llegar en la tramitación del expediente al acto de apertura de los sobres que contienen la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor con anterioridad a la resolución del recurso, este Tribunal considera conveniente que con anterioridad se haya decidido sobre el fondo del asunto.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados y, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,



## ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato de “Servicio de transporte en taxi, urbano e interurbano, en la Comunidad de Madrid”, número de expediente 6012000378 hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Por sustitución, conforme artículos 3.7 de la Ley 9/2010, 19.2 LRJAP y 5 RPERMC

LA VOCAL DEL TRIBUNAL



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: 088942523102590662475